



ASUNTO: QUEJA POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD Y NEUTRALIDAD, DE CARA A LOS COMICIOS DE 2027; POR VIOLACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE MENORES; ASÍ COMO POR CULPA IN VIGILANDO.

RESPONSABLES: PABLO GUTIÉRREZ LÁZARUS Y PARTIDO MORENA.

San Francisco de Campeche, Camp., 27 de marzo 2026

**MTRA. CLARA CONCEPCIÓN CASTRO GÓMEZ
CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
PRESENTE**

C. GILBERT ALEXANDER GAMBOA BALAM, mexicano por nacimiento mayor de edad legal, en mi calidad de Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, y señalando el domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Pedro Sainz de Baranda S/N, Edificio B, Planta Alta, Área Ah Kim Pech, Plaza del Mar, San Francisco de Campeche; con el debido respeto, comparezco para exponer:

Por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 41 Base III, Apartado a de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 24 fracciones IX, X, XI de la Constitución Política del Estado de Campeche; 610 fracciones I y II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 49 fracciones I, II del Reglamento de Quejas del Instituto Electoral del Estado de Campeche, presento mi formal queja en contra del **C. PABLO GUTIÉRREZ LÁZARUS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CARMEN, CAMPECHE; Y AL PARTIDO MORENA CAMPECHE;** por la comisión de diversos actos constitutivos de faltas al principio de imparcialidad, neutralidad y equidad, actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, en vulneración a los artículos 41 base IV y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al párrafo 1 inciso a) del artículo 3, así como a los artículos 242 y 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; por la vulneración al interés superior de menores; y al **PARTIDO MORENA** por Culpa In Vigilando.

Por lo que, en cumplimiento del artículo 606 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, se hace constar lo siguiente:

I. El nombre del quejoso y, si es persona moral, el de su legítimo representante; como ha quedado acreditado en el proemio de este escrito, **C. GILBERT ALEXANDER GAMBOA BALAM**, mexicano por nacimiento mayor de edad legal, en mi calidad de Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche.

II. La firma autógrafa o huella digital del quejoso, si es persona física, o la de su legítimo representante en caso de ser persona moral; requisito que queda colmado al calce del presente escrito de queja.

III. El domicilio del quejoso, para efectos de oír y recibir notificaciones; como se ha hecho constar en el proemio del presente escrito de queja, el ubicado en Avenida Pedro Sainz de Baranda S/N, Edificio B, Planta Alta, Área Ah Kim Pech, Plaza del Mar, San Francisco de Campeche

IV. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personalidad del quejoso y, en su caso, la de su legítimo representante; se acredita en términos del artículo 34 fracción IV del Reglamento de Quejas del Instituto electoral del Estado de Campeche.

V. Narración expresa y clara de los hechos en que se sustente la queja y los preceptos jurídicos presuntamente violados; se presentarán en el apartado correspondiente.

VI. La aportación de los elementos de prueba en que se sustente la queja; se incluirán en el apartado correspondiente.

VII. El nombre y domicilio de cada uno de los infractores:

- **C. Pablo Gutiérrez Lázarus**, el cual puede ser notificado en el predio que aloja al H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen, ubicado en Calle 22 x 31 Num. 91, Centro, C.P, 24100, Palacio Municipal, Ciudad del Carmen, Campeche
- **Partido Morena**, el cual puede ser notificado en el predio ubicado en la Calle Querétaro 2, Barrio de Sta Ana, 24050 San Francisco de Campeche, Camp., teléfono 981 144 2819, 981 811 8025, así como en los siguientes correos electrónicos: morena@ieec.org.mx, cee2014@morenacampeche.org.mx, coordinacionjuridicoelectoral@gmail.com, morenacampechesi@gmail.com

HECHOS QUE SUSTENTAN LA QUEJA Y PRECEPTOS JURÍDICOS VIOLENTADOS

HECHOS

1. Es un hecho notorio que el C. Pablo Gutiérrez Lázarus es Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Carmen.
2. El C. Pablo Gutiérrez Lázarus cuenta con la siguiente página de la red social Facebook:

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100044130711439>



3. El Gobierno Municipal de Carmen cuenta con la siguiente página de Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076442990800&ref=embed_page



4. El C. Pablo Gutiérrez Lázarus se encuentra violentando el marco normativo, realizando **PROMOCIÓN PERSONALIZADA, ACTOS ANTICIPADOS DE PRECampaña Y Campaña y USO DE RECURSOS PÚBLICOS**, lo que propicia una ventaja indebida en su favor y del partido MORENA generando inequidad en la contienda y la violación al principio de neutralidad e imparcialidad, con miras al próximo proceso electoral 2026-2027, por lo que solicito que las ligas señaladas en este escrito, así como el contenido en imagen y voz, sean certificadas por la Oficialía Electoral.
5. El 19 de marzo de 2026, a las 12:46 pm, el C. Pablo Gutiérrez Lázarus realizó la siguiente publicación, con un comentario que constituye un equivalente funcional de campaña, lo cual ocurre en tiempo prohibido para ello:

<https://www.facebook.com/share/p/1JBZGjPSf6/>



6. Asimismo, se muestra a la ciudadanía exhaltando cualidades con la intención de obtener la simpatía del electorado:

<https://www.facebook.com/share/p/1Dq9JFcwem/>

Pablo Gutiérrez Lazarus
Hace un momento · 🌐
En la labor 🧑🏻‍🔧



7
Me gusta Comentar Compartir 1 comentario

<https://www.facebook.com/share/r/18U3xiR2ns/>
<https://www.facebook.com/share/p/1Hr1F16FfN/>
<https://www.facebook.com/share/v/1B5Zsmkg7J/>
<https://www.facebook.com/share/r/17uo654Y5U/>
<https://www.facebook.com/share/p/14dKydxCXrH/>
<https://www.facebook.com/share/v/18aBuajDux/>
<https://www.facebook.com/share/r/1FAti7F5aA/>
<https://www.facebook.com/share/r/1CHT62Wpb9/>
<https://www.facebook.com/share/v/1DVEwTu5f8/>
<https://www.facebook.com/share/r/14YEPxyybU4/>
<https://www.facebook.com/share/v/1BzD7AnKZH/>
<https://www.facebook.com/share/r/14WUKqeWG2c/>
<https://www.facebook.com/share/r/1GW4XU43wJ/>
<https://www.facebook.com/share/r/1NTFHnknHW/>
<https://www.facebook.com/share/r/1BBMJ6g4Cn/>
<https://www.facebook.com/share/v/1ALYtVeHtX/>
<https://www.facebook.com/share/r/1KoUq4aiG3/>
<https://www.facebook.com/share/v/1J4NmTN4F/>

7. Utiliza las redes sociales oficiales del H. Ayuntamiento de Carmen para promocionarse:

<https://www.facebook.com/share/p/1TQ4JXztNW/>
<https://www.facebook.com/share/p/14gGFegkLRR/>

8. Exposición de menores sin el consentimiento expreso del menor y sus padres:

<https://www.facebook.com/share/p/18Q8wA3wRN/>



PRECEPTOS JURÍDICOS VIOLENTADOS

El artículo 582 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche (LIPEC) establece que son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales, los partidos políticos, aspirantes a cargos de elección popular, las y los ciudadanos o cualquier persona física o moral y las autoridades o **públicos de cualquiera de los ámbitos estatales y municipales, órganos autónomos y cualquier otro ente público**, entre otros actores.

El artículo 3, párrafo 1, inciso a, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que son actos anticipados de campaña, aquellos actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa legal de campañas, que contengan llamados al voto, expresamente o a través de equivalentes funcionales, en contra o a favor de una candidatura o un partido, o bien, expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral, para alguna candidatura o partido político.

Es así, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha determinado a través de la jurisprudencia, que para la actualización de los actos anticipados de precampaña y campaña se requiere la coexistencia de tres elementos¹, pues su concurrencia resulta indispensable:

¹ Elementos establecidos por la Sala Superior, en las sentencias recaídas a los recursos de apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, SUP-RAP-191/2010, SUP-RAP-204/2012, SUP-RAP-15-2012 y al juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-274/2010.

- Que los realicen los partidos políticos, su militancia, personas aspirantes a un cargo electivo o precandidaturas y candidaturas, en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos **que hagan plenamente identificable a la persona o partido político de que se trate** (elemento personal).
- Que dichos actos o frases **se realicen antes de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral** (elemento temporal).
- Que una persona realice actos o cualquier tipo de expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento interno, o en un proceso electoral; o bien, que **de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular** (elemento subjetivo).

De una interpretación de las sentencias y de la jurisprudencia emanadas de la Sala Superior del TEPJF, se puede enfatizar que, respecto a la Jurisprudencia 4/2011, "Los actos anticipados de campaña pueden actualizarse incluso sin una manifestación explícita de solicitar el voto, si del contexto se advierte la intención de posicionar electoralmente a alguien"; de la SUP-RAP-44/2018, se advierte que las frases ambiguas como "es tiempo de construir el futuro" o "vamos por más" pueden constituir actos anticipados si se asocian a aspirantes identificables; y del SUP-RAP-29/2023, se denota que el uso de propaganda gubernamental personalizada durante tiempos no electorales, puede constituir promoción personalizada con fines electorales anticipados. En la sentencia SX-JG-0072/2025, la Sala Regional Xalapa del TEPJF enfatizó que para satisfacer el elemento temporal, solamente se requiere que los actos y/o expresiones de apoyo se realicen antes de la etapa de precampaña o campaña electoral.

Entonces, bajo este sentido, las publicaciones denunciadas, son evidentemente contrarias a la norma electoral, dado que se actualizan los elementos que se han señalado en párrafos previos. Lo anterior porque, si bien existe un poco más de un año para el inicio del siguiente Proceso Electoral Estatal Ordinario, el cual iniciará formalmente en diciembre de 2026, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche ha manifestado la siguiente reflexión en el expediente TEEC/JE/7/2025:

"(...) bajo los criterios de la sana crítica y la máxima experiencia, han demostrado que la influencia de las acciones, tanto positivas como negativas, quedan arraigadas al criterio y al sentir de la población por mucho tiempo, y es que estudios científicos y avalados² han demostrado que los recuerdos a corto plazo duran segundos u horas, mientras que los recuerdos a largo plazo duran años.

*Y es que el cerebro, en este caso, tiende a borrar información que no se vincula con alguna experiencia o que sólo fue visto de forma banal. Esto es conocido como **la curva del olvido**³: proceso a través del cual el contenido aprendido se va olvidando de manera gradual.*

Aunado a ello, el científico Hermann Ebbinghaus en su libro "Über das Gedächtnis", ha establecido que cuando se refuerza una información más tiempo se mantiene en el pensamiento del ser humano."⁴

²Fuente citada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche: <https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2019/03/la-memoria-humana-como-creamos-rememoramos-y-olvidamos-recuerdos#:~:text=Los%20recuerdos%20a%20corto%20plazo,periodo%20limitado%20si%20lo%20repetimos.>

³ Fuente citada por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche: <https://www.ispring.es/blog/curva-del-olvido>

⁴ Véase Sentencia en el Expediente TEEC/JE/7/2025

Para comprender el contexto, es necesario reconocer que las redes sociales son un mecanismo de comunicación permanente, es decir, las publicaciones están disponibles para su visita y difusión durante mucho tiempo, de tal forma que al tener reacciones y comentarios positivos por la ciudadanía, se refuerza la idea de los beneficios que se están promoviendo y, por lo tanto, genera una percepción que trasciende a la ciudadanía, generando con ello la inequidad en la contienda.

Es así, que las publicaciones podrán ser replicadas en diversas ocasiones, tanto por los medios de comunicación y seguidores de redes sociales, generando una percepción positiva de forma excesiva, generando un mensaje reiterado y mecánico para influir en la perspectiva del electorado. Es decir, que al buscar tener la aceptación por la ciudadanía, podría conllevar el reforzamiento de la idea de los beneficios implementados por la persona denunciada; generando una percepción positiva de la población a favor de su actuación. Ello, porque la consecución de los mensajes, imágenes y videos del desarrollo de las actividades que se denuncian, generan un mensaje reiterado y mecánico para influir en la perspectiva del electorado.

El análisis de los elementos de las publicaciones denunciadas debe estar inmerso en un análisis contextual, para identificar si las expresiones contienen **equivalentes funcionales**, los cuales son expresiones objetivas, manifiestas, abiertas y sin ambigüedad que significan o denotan algún propósito a favor o en contra de una candidatura o partido político, difunden una plataforma electoral o posicionan a alguien con el fin de obtener una candidatura.

La sentencia SX-JG-76/2025 Y ACUMULADOS de la Sala Regional Xalapa establece lo siguiente:

"118. Esto es, lo que se busca con un estudio contextual e integral es que no se generen, a partir de la realización de acciones que pudieran estar, en principio, permitidas, afectaciones al principio de equidad en la contienda a partir de actos que no están justificados a la luz de los principios que rigen la contienda electoral, lo que lleva a considerar como prohibidas tales conductas. 119. Lo anterior, ya que de otra forma se generan situaciones de riesgo grave de afectación a tales principios, lo que puede también incidir en la validez de los resultados de la contienda electoral. 120. Así, entre los fenómenos políticos que se advierten en los recientes procesos electorales y en las denuncias presentadas ante las autoridades electorales, que pueden generar dudas sobre su legalidad o justificación, está la denuncia de actos anticipados de campaña a partir del desarrollo de supuestas estrategias de promoción o propaganda que implican el posicionamiento anticipado y sistemático de una persona, meses o incluso años antes del inicio de los procesos electorales. 121. Ello supone una conducta atípica en el sentido de que, en condiciones ordinarias, una manifestación de intención en participar en un procedimiento para obtener una candidatura en un futuro proceso electoral, varios meses o años antes de su inicio, no debería tener un impacto real o sustancial en la equidad de la contienda. 122. No obstante, ante circunstancias de reiteración, sistematicidad o planificación, tales conductas sí son susceptibles de generar riesgos o un impacto sustancial en los principios que rigen la contienda electoral, tanto en la equidad como en la integridad y transparencia en el uso y destino de los recursos en apoyo a una precandidatura. 123. Si bien puede considerarse que un acto aislado y espontáneo de manifestación de una aspiración política ocurrido meses o años antes de que inicie un proceso electoral no es susceptible de incidir en los principios que rigen la contienda, en la medida en que existen diversos mecanismos de garantía a lo largo de todo el proceso electoral y la ciudadanía no necesariamente se ve influenciada por tales actos aislados; no puede considerarse lo mismo cuando se está ante una estrategia sistemática encaminada al posicionamiento de una persona que públicamente se ostenta, o es presentada, como aspirante a una próxima candidatura. 124. Lo anterior, ya que tal situación sí es susceptible de generar o tener un impacto en los principios rectores de la materia electoral en la medida en que se configure una situación de inequidad respecto a otras u otros posibles participantes en la elección respectiva. 125. Por lo antes expuesto es que, al momento de analizar las conductas posiblemente violatorias de la

normativa electoral, se debe ponderar tanto si la manifestación o manifestaciones que hace una persona aspirante a un cargo de elección popular se da antes del inicio formal del proceso electoral o del inicio del periodo de campañas (elemento temporal), así como si tal conducta puede o no afectar la equidad en la contienda respectiva. 126. Para ello será preciso valorar sus circunstancias, entre ellas: si existe sistematicidad, reiteración, su impacto territorial, sus formas de ejecución, el contenido de los mensajes o el uso de otros elementos inequívocos –visuales, auditivos o simbólicos– para determinar si con ello se está presentando de forma anticipada una posible candidatura con la finalidad de obtener una ventaja indebida e injustificada. 127. Así, los actos susceptibles de configurar una infracción electoral deben ser de tal magnitud que generen de manera real o manifiesta una ventaja indebida e injustificada susceptible de trascender a la equidad de la contienda y a la debida rendición de cuentas. 128. Ello, ya que no basta la mera manifestación de una intención de una persona de participar o ser designada como candidata a un cargo de elección popular en una futura elección, si con ello no se advierten elementos o circunstancias contextuales que permitan advertir que tal manifestación es, en realidad, parte de una campaña proselitista, esto es, de un acto de propaganda sistemático o planificado encaminado a incidir en las preferencias electorales y con la posibilidad de hacerlo en un grado razonable que justifique ser considerado como una infracción a la normativa electoral.”

Asimismo, el Tribunal Electoral de Puebla, en la página 14 de la sentencia TEEP-AE-027/2021 y acumulado, señaló lo siguiente:

En la jurisprudencia comparada y la doctrina de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, se retoman parámetros para determinar qué tipo de expresiones o manifestaciones deben considerarse como propaganda electoral, entre las cuales están: “*sham issue advocacy*” que consisten en un **mensaje simulado o falso** para evitar una sanción derivada de un llamado expreso al voto; y “*functional equivalent*” que se traduce como un equivalente funcional. El equivalente funcional se utiliza para evidenciar la presencia del “*sham issue advocacy*”; es decir, de propaganda o comunicaciones que promueven o desfavorecen perspectivas identificables inequívocamente con un determinado candidato o partido político y que están elaboradas de forma cuidadosa para evitar el uso de las “**palabras mágicas**”.

Por lo tanto, estamos ante una conducta de reiteración y de sobreexposición de la persona denunciada, que inequívocamente constituye actos anticipados de precampaña y campaña a través de equivalentes funcionales en mensajes y en acciones.

Bajo esta perspectiva, se debe reconocer que la intención y finalidad de las acciones y mensajes que ha desplegado la persona denunciada es influir en las preferencias electorales. Por lo tanto, estos actos y mensajes constituyen violaciones a la norma electoral, debido a que se configuran actos anticipados de campaña. El artículo 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los actos anticipados de precampaña o campaña constituyen infracciones a la ley, los cuales deben ser sancionados a efecto de inhibir su realización.

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en la sentencia TEEP-AE-027/2021 y acumulado⁵ ha establecido que la prohibición de realizar actos anticipados de campaña protege el derecho de los contendientes a participar en un proceso electoral en condiciones de equidad, por lo que constituye un límite a la libertad de expresión e información en la medida en que tutelan el derecho constitucional a ser votado en condiciones de igualdad.

Es por ello que las conductas de denunciadas deben estudiarse al amparo de la **Jurisprudencia 37/2024. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS PUEDEN SER CONSIDERADAS SUJETOS ACTIVOS CUANDO PROMOCIONEN SU CANDIDATURA.**, y la **Jurisprudencia 9/2025. PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. ALCANCE DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES RESPECTO DE LA INFRACCIÓN Y RESPONSABILIDAD DE UNA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA**; así como lo establecido en la Jurisprudencia 12/2024 que establece que en *“el derecho a la libertad de expresión de una persona servidora pública, ésta última permanece vinculada a cumplir con los principios de neutralidad e imparcialidad. Estos principios derivan en el deber reforzado de cuidado que tiene toda persona servidora pública de evitar que su actuar público pueda influir en los comicios; así, estos principios se trastocan si los recursos públicos o la presencia, imagen o posición en la estructura de la administración se utilizan para desequilibrar la igualdad de condiciones en los comicios.”*

Bajo lo anteriormente expuesto, es claro que estos actos y mensajes no cuentan con asidero jurídico, debido a que no son actos aislados, sino una estrategia coordinada con el propósito de anticiparse a los periodos oficiales de campaña y con ello, posicionarse anticipadamente ante la ciudadanía, propiciando la inequidad y la violación a la neutralidad de las elecciones, en flagrante violación a la base IV del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al párrafo 1 inciso a) del artículo 3, así como a los artículos 242 y 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos económicos de que dispongan los entes públicos de cualquier nivel en el país, se emplearán para los fines para los que estén destinados y los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en términos del Título Cuarto de la Constitución Federal, teniendo la obligación de aplicarlos con imparcialidad sin influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos.

Asimismo, se establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan los entes públicos tendrá carácter institucional y **no incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier persona servidora pública**. Esto sin duda trastoca la equidad entre los partidos políticos, máxime cuando son los mismos servidores públicos quienes se promocionan indebidamente a través de las redes sociales de los organismos de los cuales son titulares, como es el caso de la página del H. Ayuntamiento de Carmen, quien bajo el pretexto de la transparencia, promueve al presidente municipal C. Pablo Gutiérrez Lázarus.

Es así que, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la jurisprudencia 12/2015 de rubro **“PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”**, estableció los elementos que se deben atender para identificar si la propaganda de cualquier ente público o servidor público se encuentra vulnerando los principios constitucionales, los cuales son los elementos personales (emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público); objetivo o material (análisis del mensaje) y temporal (si la promoción se realizó una vez iniciado el proceso electoral o fuera del mismo).

⁵ https://teep.org.mx/images/stories/inf_transp/resoluciones/2021/asuntos-e/RESOLUCION-AE-027-2021-AC.pdf

De dicho ordenamiento, se desprende que para determinar si los hechos pueden constituir propaganda personalizada sancionable, deben tomarse en cuenta los siguientes elementos⁶:

- **Elemento personal.** Se colma cuando se adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable a la persona servidora pública de que se trate. Lo cual en este caso se cumple porque se identifica plenamente al C. Pablo Gutiérrez Lázarus en las publicaciones.
- **Elemento temporal.** Se consideró que el inicio del proceso electoral puede ser un aspecto relevante para su definición, mas no puede considerarse el único o determinante, porque puede haber supuestos en los que aun sin haber dado inicio formal el proceso electoral, la proximidad al debate propio de los comicios evidencia la promoción personalizada de servidores públicos. Esto se colma porque el año en el que iniciará el proceso electoral ordinario 2026-2027, es este que corre.
- **Elemento objetivo o material.** Impone el análisis del contenido del mensaje, a través del medio de comunicación social de que se trate, para establecer si de manera efectiva e indubitable revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente. Lo cual se colma al promover al C. Pablo Gutiérrez Lázarus ante la ciudadanía, exhaltando sus cualidades como persona cercana a la gente, generosa y dedicada a sus labores, a efecto de generar simpatía en los votantes.

Mediante la resolución en el expediente SUP-REP-619/2022⁷, la Sala Superior determinó que "la promoción personalizada de una persona servidora pública constituye todo aquel elemento gráfico o sonoro que se presente a la ciudadanía, en el que, entre otras cuestiones, se describa o aluda a la trayectoria laboral, académica o cualquier otra de índole personal que destaque los logros particulares que haya obtenido el ciudadano que ejerce el cargo público; se haga mención a sus presuntas cualidades.", elemento que se acredita en las publicaciones denunciadas.

Asimismo, son indiciarios de falta a la normatividad, cuando en los actos y mensajes se señalen planes, proyectos o programas de gobierno que en el ámbito de sus atribuciones del cargo público se ejercen y en donde se promueve de forma personal al servidor público y no a la dependencia gubernamental en cuestión. Elemento que se colma cuando es fácilmente identificable al presidente municipal en las publicaciones.

En este orden de ideas, es identificable plenamente lo que la Sala Superior ha advertido, porque no nos encontramos ante hechos aislados, sino a una serie de publicaciones en los que se utilizan el nombre, símbolo, imagen, voz y otros elementos relacionados con la persona denunciada, de tal modo que se encuentra aprovechando su posición como servidor público, para hacer promoción personalizada, apartándose de la obligación constitucional de conducirse, en todo contexto, bajo los principios de neutralidad e imparcialidad.

Lo anterior es así porque, como lo ha reiterado la Sala Superior, la esencia de la prohibición constitucional y legal en realidad radica en que no se utilicen recursos públicos para fines distintos, ni las personas servidoras públicas aprovechen la posición en que se encuentran para que, de manera explícita o implícita, hagan promoción para sí mismos ni para un partido político, que pueda afectar la contienda electoral.

Por ello es que, ante indicios, la sala Superior ha sostenido que se debe considerar íntegramente el contexto de los hechos y no un hecho aislado de que se hubiera usado el nombre, símbolo, imagen, voz o algún otro elemento relacionado con la persona funcionaria pública implicada, para tener certeza del propósito de la difusión de este tipo de propaganda. Asimismo, no es necesario que se acredite la existencia de recurso

⁶ Jurisprudencia 12/2015, de rubro: "**PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA**". Véase también, entre otros, SUP-REP416/2022 y acumulados.

⁷ Consultable en la siguiente liga <https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-REP-0619-2022>.

económico gubernamental para dilucidar si se actualiza o no la promoción personalizada, pues lo relevante es que se acrediten los elementos antes precisados atendiendo a su contenido y al contexto de su difusión, considerando que el medio de difusión de la propaganda debe entenderse de manera genérica, ya que puede comprenderse a cualquiera que tenga como finalidad su divulgación⁸.

El Tribunal Electoral del Estado de Campeche señaló a través de la sentencia en el expediente TEEC/JE/6/2025, que pueden configurarse, al menos, tres supuestos de propaganda personalizada⁹:

1. Propaganda gubernamental realizada y difundida con recursos públicos por la persona funcionaria pública que se beneficia de su propia promoción personalizada ilegal;
2. Propaganda gubernamental realizada y difundida con recursos públicos por una persona funcionaria pública distinta a la que se beneficia por la propaganda personalizada ilegal; o
3. Propaganda gubernamental realizada y difundida sin recursos públicos por una persona servidora pública y que, por su contenido, beneficia a quien la difunde o a una persona servidora pública distinta.

De esta forma, cuando se alega una posible infracción por difusión de propaganda personalizada, ordinariamente, se acreditará esa infracción por el hecho de la existencia de una propaganda gubernamental; sea porque se trata, en sentido estricto, de propaganda elaborada o difundida con recursos públicos o porque en su contenido se difunda a una persona servidora pública con fines proselitistas, por lo que no se exige que, necesariamente, la propaganda sea pagada con recursos públicos, pues puede hacerse con recursos privados inclusive.

De esta forma, nos encontramos ante la existencia de propaganda personalizada y uso indebido de recursos públicos, porque la persona denunciada, como servidor público, se encuentra promoviendo su imagen con claros fines proselitistas en las páginas de redes sociales del H. Ayuntamiento de Carmen y en su propia red social. Las publicaciones tienen un matiz electoral, además de la promoción personalizada, porque esencialmente se realizan con la intención de influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, así como en los resultados de la jornada electoral próxima a desarrollarse en el Estado de Campeche.

Resulta pues, en este orden de ideas, de alta relevancia evitar que, quienes aspiran a ocupar cargos públicos en el futuro, realicen actos de promoción personalizada, en virtud de que ello implica una ventaja indebida en detrimento de otras personas aspirantes o contendientes que se encuentran cumpliendo el marco legal y esperando los tiempos legales para realizar actos o enviar mensajes que los coloquen en la preferencia de la ciudadanía; en lugar de hacerlo a través de una ilícita promoción personalizada como es el caso de la persona denunciada, quien, con su conducta, se encuentra afectando la equidad de la contienda y con ello, se encuentra en flagrante violación al marco constitucional y legal en materia de uso indebido de recursos públicos.

Bajo la apariencia del buen derecho, no se cuenta con respaldo legal para las acciones de promoción que se encuentra llevando a cabo, especialmente porque se encuentran fuera de toda norma, ya que de manera abierta y en claro interés de participar en las elecciones que se llevarán a cabo en 2027, la persona denunciada se encuentra promoviendo su imagen de forma reiterada y simultánea. Es decir, de ningún modo sus apariciones en los eventos denunciados, sus publicaciones o mensajes son aislados o espontáneos, por el contrario, son

⁸ En ese sentido, se incluye a la radio, televisión, las redes sociales, las páginas de internet, los anuncios espectaculares, cine, mantas, pancartas, prensa, de entre otros medios de comunicación en los cuales se difunda visual o auditivamente la propaganda. Véase lo resuelto en el expediente SUP-REP-151/2022 y acumulados, así como la Jurisprudencia 17/2016 de rubro: **"INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO"**. Criterio utilizado por el TEEC al resolver el medio TEEC/JE/6/2025.

⁹ Dicha clasificación la realizó la Sala Superior al resolver el recurso SUP-REP-393/2023.

parte de una estrategia adminiculada para posicionarse indebidamente ante la ciudadanía, con miras a obtener alguna candidatura en el proceso electoral 2026-2027 en el Estado de Campeche.

Siendo que el uso indebido de recursos públicos se encuentra ligado a la promoción personalizada, es menester que se sancione de forma inequívoca tal ilícito. Ello, porque tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han sostenido que las redes sociales de los servidores públicos constituyen un canal de comunicación directo con la sociedad y por ende, están sujetas al control de la transparencia y el acceso a la información pública¹⁰, por lo cual su uso es una extensión de la persona servidora pública y su uso para promocionarse indebidamente, constituye uso indebido de recursos públicos.

El Tribunal Electoral del Estado de Campeche, a través de la sentencia en el expediente TEEC/PES/115/2024, advirtió que las personas servidoras públicas realizan actividades permanentes y, por lo tanto, reciben recursos públicos para sostener sus actividades, dando como consecuencia que la realización o asistencia a eventos públicos, el uso de sus redes sociales para promocionarse o cualesquier otra actividad de promoción o para generar simpatía a un partido o candidatura, implica la afectación indebida a la equidad en la contienda electoral y se traduce en una donación del funcionario respecto del erario que implica su función en actos o actividades que constituyen una infracción a la ley electoral.

Asimismo, en la sentencia recaída en el expediente TEEC/JG/007/2025, manifiesta que *“... un servidor público no puede realizar un desdoblamiento de su personalidad, para despojarse de su figura al servicio del estado y actuar como un ciudadano más en actos que corresponden a un ejercicio legítimo de un derecho, ya que por su condición debe atender a una mayor pulcritud en su comportamiento público a fin de no vulnerar los principios constitucionales de imparcialidad y equidad, (...) ... el deber de aplicar con imparcialidad los recursos impacta en el uso de las redes sociales, pues ellas constituyen medios comisivos de infracciones electorales y su uso por parte de las personas servidoras públicas debe regirse por el principio de imparcialidad. (...) ... el principio de imparcialidad impone a las personas servidoras públicas la obligación de no influir en la equidad de las contiendas mediante el uso de recursos públicos, entendidos estos no sólo en su dimensión material -como bienes, instalaciones, vehículos, personal o presupuesto-, sino también en su dimensión simbólica o institucional, como puede ser el uso del cargo, la investidura, la proyección pública del funcionario o los canales de comunicación oficiales (...) ... la directriz de mesura, en el comportamiento que deben observar las y los servidores públicos debe guiar todas y cada una de sus actuaciones, en el contexto del pleno respeto a los valores democráticos; (...)”*; así, del análisis de dicha sentencia se puede deducir que el uso de redes sociales para promocionarse, tanto de las cuentas oficiales del H. Ayuntamiento de Carmen, como de su cuenta personal, indudablemente devienen en el uso indebido de recursos públicos que afectan la equidad de la contienda entre futuras candidaturas, entre partidos políticos y entre las diversas fuerzas políticas que participarán en el próximo proceso electoral estatal ordinario de Campeche 2026-2027.

Además de lo expuesto por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, las personas servidoras públicas deben conducirse en todo momento con prudencia discursiva y no deben promocionar programas gubernamentales como logros particulares, ya que ello constituye un modo ilegal de posicionarse ante la ciudadanía, constituyendo una ilegal promoción personalizada, con la intención de influir en la contienda electoral. Refuerza lo anterior, la Jurisprudencia dictada por Sala Superior: **Jurisprudencia 12/2024 LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS TIENEN LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE CONDUCIRSE CON PRUDENCIA DISCURSIVA, A FIN DE QUE SU ACTUAR NO ROMPA CON LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD IMPUESTOS CONSTITUCIONALMENTE.**

¹⁰ Amparo 1005/2018, Jurisprudencia 19/2026 TEPJF

Por lo antes expuesto es que, al momento de analizar las conductas aquí denunciadas, como violatoria de la normativa electoral, se debe ponderar los elementos señalados, así como si tal conducta puede o no afectar la equidad en la contienda respectiva y si ello está generando una ventaja indebida e injustificada a favor del C. Pablo Gutiérrez Lázarus, con miras a obtener la preferencia electoral en caso de ostentar una candidatura en el próximo proceso electoral 2026-2027.

En este orden de ideas, la Sala Superior, en la resolución SUP-REP-229/2023¹¹, señaló que el elemento temporal se acredita si los hechos tienen verificativo fuera del periodo previsto por la ley para promocionarse con una precandidatura o candidatura. Por lo tanto, no tiene que establecerse una cercanía específica al inicio del proceso electoral o a la etapa de campaña, para que exista la presunción de afectación y trascendencia de los efectos de la promoción personalizada en los principios que rigen la materia electoral, en particular, en el de equidad en la contienda, puesto que es razonable asumir que quienes realizan tales actos buscan orientar su conducta para efecto de impactar anticipadamente en las preferencias de la ciudadanía y en los diferentes actores políticos y generar una ventaja indebida a su favor¹².

Por otra parte, hay que considerar que los servidores públicos, deben limitar su participación en eventos de entrega de apoyos sociales, porque su sola participación es una violación a los principios de imparcialidad y equidad en las contiendas electorales, debido a que se genera un sentido de simpatía y de gratitud ante una futura candidatura. De la interpretación sistemática y funcional de la **Jurisprudencia 35/2024 COACCIÓN AL VOTO. SE ACTUALIZA ANTE LA PUESTA EN PELIGRO DE LA LIBERTAD DE SUFRAGIO, SIN NECESIDAD DE DEMOSTRAR VIOLENCIA, AMENAZAS O ALGÚN OTRO ACTO MATERIAL.**, se reconoce que la coacción al voto se actualiza sin que sea necesario acreditar un acto material de violencia o amenazas, basta con que exista una posibilidad de cambiar sus condiciones y prerrogativas sociales, para que se considere una influencia al ejercicio de los derechos político-electorales en libertad de la ciudadanía.

Es así, que se deben analizar no solamente los mensajes, sino también la presencia del servidor público, debido a que su sola presencia en la entrega de apoyos sociales como los que se visualizan en los videos de las publicaciones denunciadas, puede ser una forma de trasgredir el principio de neutralidad, tal como se establece en la **TESIS LXX/2024 PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD. CUANDO SE DENUNCIE SU TRANSGRESIÓN SE DEBE ANALIZAR CON INDEPENDENCIA DE SU TRASCENDENCIA A LA CIUDADANÍA.** Ello, porque la Sala Superior ha advertido que las y los servidores públicos deben conducirse en todo momento con prudencia discursiva y además, no deben promocionar programas y logros de gobierno de forma personal, mucho menos atribuirse la entrega de apoyos que corresponden al gobierno de forma personal, ya que de modo alguno esas conductas deben influir en la contienda electoral próxima a realizarse en el estado de Campeche. Ello, como señala la **Jurisprudencia 18/2011. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD.**

El Tribunal Electoral del Estado de Campeche señaló en la sentencia en el expediente TEEC/PES/115/2024, las personas servidoras públicas realizan actividades permanentes y por lo tanto, reciben recursos públicos para sostener sus actividades, de tal forma que, la realización o asistencia a eventos de entrega de apoyos, utilizando las redes sociales oficiales y personales para promocionarse en dichos eventos, implica la afectación indebida a la equidad en la contienda electoral y se traduce en una donación del funcionario respecto del erario que implica su función en actos o actividades públicas; lo cual constituye una infracción a la ley electoral.

¹¹ Consultable en <https://www.te.gob.mx/media/SentenciasN/pdf/Superior/SUP-REP-0229-2023.pdf>

¹² Similar criterio sostuvo la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SER-PSC-13/2023. Consultable en https://www.te.gob.mx/EE/SRE/2023/PSC/13/SRE_2023_PSC_13-1230476.pdf

VULNERACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR

En diversas publicaciones, se exhibieron imágenes de menores de edad, vulnerando su personalísimo derecho a la intimidad. En dichas publicaciones, aparecen personas menores de edad identificables plenamente y sin que exista ningún indicio de que se cuente con el permiso de los padres y/o tutores legales, como lo marca la norma legal correspondiente.

Con estas acciones, se incumple con lo establecido en los artículos 78 fracción I, relacionado con el artículo 76 párrafo segundo, así como con el artículo 77 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 76 fracción I, relacionado con el 74 párrafo segundo, y 75 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche.

Asimismo, al constituirse en una campaña electoral anticipada, se encuentra en el supuesto del artículo 409 párrafo primero de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; ante esto, es aplicable lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la serie jurisprudencial, respecto a los siguientes criterios establecidos en las jurisprudencias 5/2017 y 20/2019, respecto de la protección del interés superior de los menores en materia de propaganda político-electoral:

PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIRSE CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. De lo dispuesto en los artículos 1º y 4º, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño; 78, fracción I, en relación con el 76, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y 471, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstos en todos los órdenes relativos a su vida. Entre ellos, se encuentra el derecho a la imagen de las niñas, niños y adolescentes, el cual está vinculado con el derecho a la intimidad y al honor, entre otros inherentes a su personalidad, que pueden resultar eventualmente lesionados o partir de la difusión de su imagen en los medios de comunicación social, como ocurre con los spots televisivos de los partidos políticos. En ese sentido, si en la propaganda político o electoral se recurre a imágenes de personas menores de edad como recurso propagandístico y parte de la inclusión democrática, se deben cumplir ciertos requisitos mínimos para garantizar sus derechos, como el consentimiento por escrito o cualquier otro medio de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente en función de su edad y su madurez. Sexta Época

PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 42, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 14 de los Lineamientos Generales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes Electorales establecidos por el Instituto Nacional Electoral; y en la Jurisprudencia de la Sala Superior 5/2017, de rubro PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIRSE CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, se advierte que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. En ese sentido, cuando en la propaganda político-electoral, independientemente si es de manera directa o incidental, aparezcan menores de dieciocho años de edad, el partido político deberá recabar por escrito el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tutela, y en caso de que no cuente con el mismo, deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificable a los niños,

niñas o adolescentes, o fin de salvaguardar su imagen y, por ende, su derecho a la intimidad. Sexta Época

Es claro que las publicaciones denunciadas vulneran el interés superior de las personas menores de edad que aparecen en las fotografías y videos, expuestos ante la ciudadanía, puesto que no se protegió el derecho humano de las niñas, niños y adolescentes al no difuminar sus rostros para hacerlos irreconocibles. Esto, porque en ninguna parte de las publicaciones se menciona que las personas menores de edad que aparecen cuentan con el permiso propio y de sus padres o tutores legales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la atención de asuntos relacionados con el interés superior de la niñez debe considerarse urgente sin dilación alguna, tal como se establece en la Jurisprudencia 2ª./j.113/2019 (10ª.):

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá" lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate.

Es así como, no solamente se configura la infracción de campaña anticipada y promoción personalizada, sino que además se encuentran violentando el derecho a la intimidad de menores de 18 años. Por lo que la persona denunciada se encuentra en los supuestos de los artículos 585, 586 y 589 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche.

CULPA IN VIGILANDO DEL PARTIDO MORENA

Se acredita la responsabilidad del Partido Político MORENA en el presente asunto, toda vez que es el responsable directo de vigilar el actuar de sus militantes, situación que, en el caso específico, como se puede observar de las pruebas ofrecidas, no se realizó, máxime que las conductas sobre las cuales no se tuvo el deber de cuidado, colisiona y vulnera directamente el marco normativo que rige la materia electoral.

Es así, que la persona denunciada al ser visiblemente militante del Partido Morena, así como funcionario público emanados de ese partido, al vulnerar la norma constitucional y legal en materia de ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS, a través de las publicaciones descritas, resulta relevante que dicho partido político eleva su grado de responsabilidad y

vigilancia en las conductas llevadas a cabo por las personas que los representan, como lo refiere el siguiente criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.

La interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales permite concluir, que los partidos políticos son personas jurídicas que pueden cometer infracciones a disposiciones electorales a través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido político. Para arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta que las personas jurídicas (entre las que se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden actuar por sí solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de acciones de personas físicas, razón por la cual, la conducta legal o ilegal en que incurra una persona jurídica sólo puede realizarse o través de la actividad de aquéllas. El legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes capaces de cometer infracciones o las disposiciones electorales a través de personas físicas, tanto en la Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos políticos serán sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto, como en el ámbito legal, en el artículo 38, que prevé como obligación de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y lo de sus militantes o los principios del Estado democrático; este precepto regula: a) el principio de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la norma como base de la responsabilidad del partido, lo que es acorde con el artículo 269 mencionado, el cual dispone que al partido se le impondrá una sanción por la violación o la ley y, b) la posición de garante del partido político respecto de la conducta de sus miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque ésta se ajuste o los principios del Estado democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad, de manera que las infracciones que cometan dichos individuos constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación del garante -partido político- que determina su responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las conductas realizadas dentro de las actividades propias del instituto político; esto conlleva, en último caso, la aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. El partido político puede ser responsable también de lo actuación de terceros que no necesariamente se encuentran dentro de su estructura interna, si le resulta la calidad de garante de la conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la base de que, tanto en la Constitución como en la ley electoral secundaria, se establece que el incumplimiento a cualquiera de las normas que contienen los valores que se protegen con el establecimiento a nivel constitucional de los partidos políticos, acarrea la imposición de sanciones; estos valores consisten en la conformación de la voluntad general y la representatividad a través del cumplimiento de la función pública conferida a los partidos políticos, la transparencia en el manejo de los recursos, especialmente los de origen público, así como su independencia ideológica y funcional, razón por lo cual es posible establecer que el partido es garante de la conducta, tanto de sus miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo establecido en la doctrina, en el sentido de que los actos que los órganos estatutarios ejecutan en el desempeño de las funciones que les competen se consideran como actos de la propia persona jurídica, y del deber de vigilancia de la persona jurídica -culpa in vigilando- sobre las personas que actúan en su ámbito.

La Sala Superior ha considerado que cuando se trate de acciones de terceras personas en beneficio de un partido político, se debe analizar si se trata de actos en ejercicio legítimo de su libertad de expresión o se trata de casos de simulación o abuso en el ejercicio de ese derecho, por encargo o con la participación de un sujeto obligado, que implican una promoción anticipada injustificada de una opción política, lo que podría también trascender a la ciudadanía y tener un impacto en la equidad de la contienda.

SOLICITUD DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

Es necesario en consecuencia la que esta autoridad administrativa electoral lleve a cabo las medidas que resulten necesarias, entre ellas la certificación de las publicaciones señaladas en el presente escrito, publicadas en las redes sociales de Facebook, así como solicitar que se retire toda la propaganda que se ha publicitado, porque además se configuran violaciones de tacto sucesivo, al permanecer en las cuentas de redes sociales, tanto oficiales como personales, la exposición de entrega de insumos de beneficio social, con la imagen de la persona denunciada, como parte de la propaganda política-electoral que de forma adminiculada cuentan con la intención de generar preferencia hacia su probable candidaturas así como ordenar a la persona denunciada y al partido político correspondiente, a abstenerse de publicar propaganda que implique actos de campaña anticipada y promoción personalizada; así como en el caso de las publicaciones en donde se han exhibido a menores de edad con rostros plenamente identificables, el retiro de dichas publicaciones o la difuminación de los rostros de personas menores de edad.

Por lo que, como órgano sustanciador que conoce en primera instancia del procedimiento sancionador y garante de la legalidad y equidad en la contienda electoral, le solicito en términos del artículo 614 párrafo primero de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche en relación con la tesis LX/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la emisión de las medidas cautelares pertinentes de manera urgente y sin dilación, para el retiro de cualquier tipo de publicidad que incumpla con la ley electoral, en todas las páginas en redes sociales de la persona denunciada y del H. Ayuntamiento de Carmen.

Lo anterior como lo establece la Tesis XXXVIII/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

MEDIDAS CAUTELARES. LA PROBABLE PROMOCIÓN PERSONALIZADA DE UN SERVIDOR PÚBLICO EN LA PROPAGANDA DE PARTIDOS POLÍTICOS ES SUFICIENTE PARA SU ADOPCIÓN. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, Base I y III, Apartado A y 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que los partidos políticos tienen derecho al uso permanente de los medios de comunicación social, como radio y televisión, a fin de transmitir propaganda partidista; sin embargo, dicha propaganda no puede incluir de manera preponderante el nombre, la imagen o la voz de algún servidor público, pues de ser así, se desvirtuaría el objeto de la misma. En consecuencia, cuando de un análisis preliminar se advierta que la propaganda de los partidos políticos contenga elementos que identifiquen a un servidor público con la probable promoción de su persona bajo la apariencia del buen derecho resulta procedente la adopción de las medidas cautelares correspondientes.

La Sala Superior se ha pronunciado al respecto en el expediente SUP-REP-538/2022, mediante el cual ratificó el acuerdo ACQyD-INE-144/2022 emitido por la Comisión de Quejas del INE, que declaró la procedencia de la tutela preventiva y medidas cautelares respecto del partido Morena, por la organización de un evento aparentemente proselitista el 26 de junio de 2022 en el estado de Coahuila, así como de 30 personas servidoras públicas y el Dirigente Nacional de Morena, al considerar que participaron en forma activa y preponderante en dicho evento, mismo que se consideró parte de una estrategia de posicionamiento electoral, con miras al proceso electoral 2023-2024. Dentro de las personas a las que se les dictó medidas de tutela preventiva, se encontraban tres personas diputadas federales, entre ellos el Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.¹³

¹³ https://centralectoral.ine.mx/2022/07/20/ine-ordena-a-personas-servidoras-publicas-que-se-abstengan-de-asistir-participar-organizar-convocar-y-realizar-actos-de-proselitismo-politico/?utm_source=chatgpt.com

Por lo anterior, es procedente el dictado de las medidas cautelares solicitadas.

PETICIÓN DE INVESTIGACIÓN DILIGENTE, PRONTA Y EXPEDITA

Con fundamento en el artículo 283 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, se solicita que la Secretaría Ejecutiva, a través de la Oficialía Electoral o de la Unidad Administrativa que considere pertinente este Organismo Público Local Electoral, dé fe y levante acta circunstanciada de las publicaciones denunciadas y cuyas ligas electrónicas obran en el Apartado de Hechos.

Lo anterior con relación a las Jurisprudencias 28/2010 y 22/2013, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REQUISITOS PARA SU EFICACIA PROBATORIA., y PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS LEGALMENTE PREVISTAS PARA SU RESOLUCIÓN.

PRUEBAS

Se ofrecen para demostrar la veracidad de los hechos denunciados las siguientes probanzas:

1.- DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en todas y cada una de las ligas electrónicas vertidas en el escrito de queja, las cuales se solicita que sean verificadas por la autoridad electoral.

2.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el Acta Circunstanciada de Inspección Ocular que se elabore, con motivo de la diligencia solicitada en sitio para perfeccionamiento de las técnicas antes ofrecidas y se corrobore en los sitios de internet, la existencia de la propaganda denunciada.

3.- PRESUNCIONES LEGALES Y HUMANAS. En su doble aspecto en todo y cuanto beneficie a la parte que represento, dicha prueba se relaciona con todo y cada uno de los hechos de la presente.

4.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo y cuanto beneficie a la parte que represento, dicha prueba se relaciona con todo y cada uno de los hechos de la presente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a este Instituto Electoral del Estado de Campeche, atentamente solicito:

PRIMERO. Tenerme por presentado, en tiempo y forma, reconociéndome la personalidad con la que comparezco, con el presente escrito de Queja en contra de la persona denunciada y del partido MORENA, por los hechos que se denuncian.

SEGUNDO. Se me notifique el número de expediente asignado.

TERCERO. Se lleven a cabo las diligencias necesarias para confirmar la veracidad del contenido de las publicaciones insertas en el presente que se relaciona a los hechos denunciados.

CUARTO. Se otorguen las medidas cautelares solicitadas en el capítulo correspondiente del presente recurso.


QUINTO. Se realicen todas y cada una de las diligencias de investigación necesarias, por parte de la autoridad administrativa electoral para que se radique y admita la presente Queja, así como emplazar a la persona denunciada.

SEXTO. Se fije fecha y hora para audiencia de pruebas y alegatos.

SÉPTIMO. En términos de la legislación y reglamentación vigente, una vez agotada la sustanciación del Procedimiento Sancionador que se conforme con motivo de la presente Queja, se emita la resolución correspondiente.

OCTAVO. Se me notifique la resolución correspondiente.

PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO



LIC. GILBERT ALEXANDER GAMBOA BALAM
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

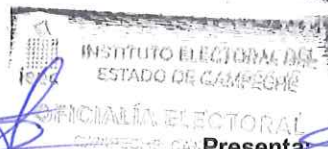


INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

*"Voz que decide; acción que transforma;
consolidando la democracia participativa"*



En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las once horas con cuarenta minutos del día 27 de marzo del año 2026, se presentó ante la Oficialía Electoral el C. Gilbert Alexander Gamboa Balam, mismo que se identifica con SU INE OCR: 0004078036474, para entregar 1 original 1 copias del escrito de queja de fecha 27 de marzo del 2026, en contra del C. Pablo Gutiérrez Lázarus y Partido Morena. constante de 19 fojas de ambos lados. SIN ANEXOS



Recibe:

LIC. CARLOS IVÁN NOVELO OLIVARES
AUXILIAR TECNICO C DE LA
OFICIALÍA ELECTORAL.

Presenta:

LIC. GILBERT ALEXANDER GAMBOA BALAM.

